

JUICIO VERBAL

Promovido por el C. Lic. Rafael Casco en el Juzgado de Distrito de Tlaxcala, contra el Promotor fiscal del mismo, sobre pago de derechos que reclama de la hacienda pública.

ACTA DEL JUICIO VERBAL.

En ocho del mismo, el C. juez dijo: que habiendo visto la demanda intentada por el C. Lic. Rafael Casco, de esta vecindad, en juicio verbal, contra el C. Promotor fiscal de Distrito por la suma de 84 pesos que el primero cobra á la federacion por honorarios que dice devengó con el caracter de Promotor fiscal, por virtud del nombramiento que el C. primer juez suplente de Distrito hizo en su persona por falta de propietario; la respuesta que á la referida demanda dió el Promotor fiscal C. Lic. José Cirilo Alva, y lo posteriormente alegado por el actor, y

Considerando: que aunque el C. Lic. Rafael Casco, funda el cobro de los honorarios que en el presente juicio demanda á la federacion por valor de 84 pesos, en el art. 1º del decreto de 4 de Diciembre de 1835, por haber sido nombrado Promotor fiscal por faltas el propietario, por el C. juez primer suplente de Distrito, conforme á la disposicion citada, tal nombramiento sin embargo, no debe estimarse legal, por no haberse hecho conforme á lo prevenido en la ley de 22 de Mayo de 1834 vigente;

Considerando; que esta ley en los artículos 41 y 43 determina la manera de cubrirse las vacantes que absoluta ó temporalmente dejen los Promotores fiscales, sin conceder á los jueces de Distrito la facultad de nombrar á aquellos funcionarios. Que segun el sentir del sabio jurisconsulto D. Joaquín Escribano, "cuando las leyes nuevas no mandan sino cosas que *Solo en parte* son contrarias ó diversas de las mandadas en las antiguas, subsisten entonces tanto las unas como las otras y deben expli-

carse mutuamente las antiguas por las nuevas y las nuevas por las antiguas;" de cuya doctrina se deriva rectamente la vigencia de la ley de 22 de Mayo de 1834, aunque no tuviera, como tiene, en su favor la constante práctica y constumbre. (Diccionario de Legislacion de Escribano, palabra interpretacion de las leyes, reg. 9ª). Quo sin embargo de que en el caso presente el art. 1º del decreto de 4 de Diciembre de 1835 se halla en contradiccion con la ley de 22 de Mayo de 1834, el juzgado, conforme con el fundamento que antecede, explicando la ley nueva por la antigua, debo normar sus procedimientos por ésta, entre otras razones en el caso actual, por estar seguro de la vigencia de esta, mientras no lo está de la del decreto de 1835, cuya vigencia es dudosa; á lo menos en cuanto á la parte final de su primer artículo; Que en caso de duda en cuanto á la aplicacion de las dos disposiciones citadas, seria lícito seguir la opinion mas comun, estando suficientemente autorizada. Que si bien este juzgado no tiene conocimiento perfecto é indudable de que el decreto de 4 de Diciembre de 1835 haya sido derogado, tiene muy sólidos fundamentos, para presumir rectamente que lo está en cuanto á su art. 1º, á lo menos desde el dia 24 de Julio de 1870 (nota del ministerio de justicia de 24 de Julio de 1870, y Semanario Judicial 2ª part. pág. 278 1ª columna §. 2º. Que por lo menos puede asegurarse que el mencionado art. 1º del decreto de 4 de Diciembre de 1835 ha caído en desuso siguiendo la opinion mas comun por las razones siguientes.

Primera; por que todas las veces que la superioridad se ha dirigido económicamente á este juzgado en los procedimientos de su oficio, se ha remitido á la ley de 22 de Mayo de 1834 y no á la de 4 de Diciembre de 1835:

Segunda; por que la primera ley es orgánica y el segundo decreto no tiene mas caracter, segun el parecer del de la Supre-

ma Corte de Justicia, sino el de transitorio: y

Tercero; por que las resoluciones de los poderes superiores, cuales son el Ministerio de justicia, el Procurador general de la nacion, y la Suprema Corte se hallan en consonancia con aquella opinion, siguiendo en caso de contrariedad la ley de 22 de Mayo, con preferencia al decreto de 4 de Diciembre de 1835; y en opinion del C. Procurador, que espone con pruebas concluyentes, el último decreto debe tenerse por derogado por ser contrario á la carta fundamental de la República (Semanario Judicial 2ª parte pág. 77 resolucion del Ministerio de justicia de 26 de Enero de 1871, á la instancia que ante el mismo Ministerio hizo el C. Casco para que se le pagaran los honorarios que reclama Semanario Judicial, parte 2ª pág. 77, id, parte. 2ª pág. 282, 2ª columna: iden parte 2ª pág. 278 § 2º 1ª columna): que el repetido decreto de 4 de Diciembre de 1835 que en su primer artículo autoriza el cobro de honorarios á los promotores fiscales, nombrados por el juez en negocios de parte, actualmente debe entenderse derogado por anticonstitucional, por hallarse en contradiccion con la parte final del artículo 17 de la carta fundamental de la República que abolió las costas judiciales, y á cuyo fin la ley de 22 de Mayo de 1834, establece el nombramiento de aquellos funcionarios, no pagados por las partes sino dotados por la federacion:

Considerando ademas, que la alegacion del actor cuando dice que el acuerdo de la Suprema Corte citada, aunque tenga algun valor; no es aplicable á su caso, supuesto que habiendo sido posterior á su nombramiento de promotor, no puede tener efecto retroactivo; tal alegato en nada favorece á su intencion por dos razones: primera, porque el funcionario que con mas calor defiende la vigencia del decreto de 1835, concede que fué derogada la parte final del primer art. que hace al caso actual, por

lo menos desde el dia 24 de Julio de 1870, y el C. Rafael Casco fué nombrado promotor en Setiembre y Noviembre del mismo año, es decir algunos meses despues de considerarse derogado el art. 1º del decreto de Diciembre de 1835; y en segundo lugar porque las resoluciones superiores expuestas, solo sirven para demostrar que desde el actual régimen constitucional no está en vigor ó en uso el repetido decreto de 1835; pero de ninguna manera son derogatorios de este decreto ni podrian serlo bajo el carácter que legalmente tienen, porque ni ellas, ni el acuerdo de la Suprema Corte, importan una ley.

Considerando por último: que tampoco tiene aplicacion en el presente caso el art. 5º de la Constitucion de 1857 que el actor invoca en favor de su demanda, y que previene que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento; porque en primer lugar, ni consta ni ha probado el C. Lic. Casco, ni siquiera iniciado, que hubiera sido violentado por el C. juez primer suplente en el nombramiento de promotor fiscal; por lo que debe entenderse que indudablemente aceptó libre y espontáneamente aquel encargo; y en segundo lugar, porque hasta esta fecha no se le ha negado el derecho que pueda tener á la justa retribucion que pretende y que puede obtener cuando y contra quien haya lugar en derecho; tanto mas, cuanto que aun el mismo decreto en que él funda su demanda, aun suponiéndolo en vigor, no dice que la federacion pagará al promotor fiscal que nombre el juez, sino solo dice á la letra, "que llevará honorarios en los negocios de parte," por cuyas palabras debe entenderse que los dichos honorarios los pagaria la que fuere vencida en costas. Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 41 y 43 de la ley de 22 de Mayo de 1834, definitivamente juzgando, fallo:

Primero; no habiendo sido legal el nombramiento de promotor fiscal, hecho por el

primer juez suplente de Distrito en la persona del C. Lic. Rafael Casco en Setiembre y Noviembre de 1870, no ha lugar á que la federacion le pague los ochenta y cuatro pesos sobre que versa esta denuncia y que le reclama con el carácter de honorarios devengados.

Segundo; sáquese copia de esta sentencia, y remítase para su publicacion á los editores del Semanario Judicial como está mandado. Notifíquese. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Lázaro María Limón, juez de Distrito en este Estado por ante mí. Doy fé.—
Lic. Lázaro M^{re} Limón.—V. Mariano Paredes.

AMPARO.

Juicio promovido en el juzgado de Distrito de Jalisco por el C. Remigio Carrillo, contra una providencia del gobernador del Estado que vulnera las garantías constitucionales que aseguran los artículos 7 y 31 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Sr Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

En la respuesta de 4 del actual creyó, el que habla, haber demostrado que no procede el amparo de garantías individuales solicitado por el C. Remigio Carrillo, por no haber cometido el C. gobernador ningún atentado en la multa de trescientos pesos que le impuso, por haberse publicado en su imprenta un escrito contra el C. jefe político de esta ciudad, sin el nombre de su autor ó responsable de esa publicacion.

Entró en esa vez, el que suscribe, al fondo de la cuestion, aun contra la opinion de ese juzgado, manifestada en algunos otros negocios, porque cree, que conforme á la

última parte del art. 5º y segun el art. 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, para que el amparo proceda y haya lugar á la suspension inmediata de la ejecucion del acto que se reclama, son indispensables la concurrencia de estas dos condiciones esenciales: que el acto reclamado esté comprendido en alguna de las fracciones del artículo 1º de dicha ley; esto es, que en los negocios de la naturaleza del presente, haya violacion de alguna garantía individual; y que la suspension sea necesaria y urgente, porque verificado el acto que se reclama no admite reparacion posible el mal que produce.

Asentó el que responde, en su escrito del dia cuatro, que no habia habido atentado ni urgencia para la suspension de la ejecucion del acto reclamado; y en esta vez con mas espacio procurará demostrar esos dos puntos.

La ley de 4 de Febrero de 1868 se propone dos objetos: marcar límites racionales y convenientes á la libertad de imprenta; ó lo que es lo mismo, impedir los arranques perjudiciales de un espíritu estraviado; y por la calificacion del abuso que se haga de la libertad de imprenta por el franqueamiento de esos límites, que la ley reputa como delito, estableció tribunales populares.

Como si estas medidas precautorias no fueran bastantes, exigió por sus artículos 34 y 42, que todo impreso no científico, artístico ó literario, contenga forzosamente la firma de su autor: este precepto no envuelve mas que una fórmula que ha de observarse rigurosamente, y su infraccion no importa verdaderamente un abuso de la libertad de imprenta; porque el objeto de la ley en esa parte, no ha sido otro, que como lo expresaron los legisladores constituyentes en 13 de Enero de 1857, combatir el anónimo y engrandecer la mision del escritor público, obligándolo á revestirse del valor y entereza, cuyas cualidades han sido raras desgraciadamente en nuestro país.